

Subsecretario de Agricultura confirma gestiones con agroindustrias para enfrentar crisis remolachera

En su visita a la provincia de Biobío, Francesco Venezian reveló reuniones con distintas empresas del rubro agrícola y hortícola con el objetivo de generar alternativas para productores afectados tras la suspensión de la contratación de remolacha anunciada por Iansa, además de abordar la necesidad de entregar “certeza productiva” al sector agrícola regional.

Nicolás Maureira Royo
 prensa@latribuna.cl

La paralización de la recepción de remolacha para la temporada 2026-2027 y las alternativas que se analizan para los agricultores afectados marcaron parte de la visita del subsecretario de Agricultura, Francesco Venezian, a la provincia de Biobío, donde abordó además el escenario agrícola regional y la necesidad de entregar “certeza productiva” al sector.

El escenario se arrastra desde el 29 de abril, cuando Empresas Iansa informó que no contratará remolacha para la producción de azúcar durante la temporada 2026-2027 en su planta de San Carlos, región de Ñuble, decisión que generó preocupación en productores de Biobío y otras regiones del centro sur.

Posteriormente, el lunes 4 de mayo, dirigentes de la Federación Nacional de Remolacheros (Fenare) viajaron a Santiago para reunirse con autoridades del Ministerio de Agricultura y plantear los efectos de la medida sobre productores, empleo y superficie cultivada.

En ese contexto, el subsecretario confirmó gestiones con distintas agroindustrias para buscar alternativas productivas destinadas a agricultores afectados por la suspensión de la contratación de remolacha.

Las declaraciones fueron realizadas durante el seminario “Desafíos de seguridad para el sector rural de Biobío”, organizado el pasado viernes 15 de mayo de manera conjunta por el Observatorio de Delitos Rurales de Socabío y Empresa Periodística Biobío.

¿Cuál es la relevancia que tiene para el sector agrícola contar con instancias como el seminario “Desafíos de seguridad para el sector rural de Biobío”?

—Muy contento por el grado de profesionalismo que se le está colocando a una problemática como el robo en sectores rurales, a través de organizaciones como Socabío, que está levantando este observatorio del delito. Es relevante porque expone la realidad que está pasando en el sector rural y cómo afecta no solamente al agricultor, sino también a toda la comunidad que depende de esta actividad.

Hoy día se están analizando distintas problemáticas y también cómo se recopila la información de las denuncias. Eso permite estandarizar antecedentes y entender por qué muchas veces no se denuncia. Existe bastante desilusión respecto al avance de las investigaciones o las sanciones finales que puedan existir frente a un delito.

¿Cuál es la evaluación que realizan desde el Ministerio de Agricultura respecto al impacto que tendrá la suspensión de la contratación de remolacha para la temporada 2026-2027?

—Hoy día la superficie total afectada son 6.400 hectáreas, de las cuales 4.250 hectáreas están en manos de 238 productores. Esto afecta a las regiones del Maule, Ñuble y Biobío, y dentro de ellas, Biobío tiene cerca de 3.100 hectáreas afectadas. Lamentablemente es una decisión que impacta a un sector remolachero importante del país y a una industria que lleva muchos años en Chile.

Iansa, más que un cierre, está realizando una paralización de su planta respecto a la remolacha, porque la planta

sigue operativa procesando azúcar de caña. El mercado internacional de la caña hoy es más económico y rentable. Eso no quiere decir que en dos o tres años no pueda existir nuevamente interés por producir remolacha, pero un agricultor que queda desilusionado difícilmente va a esperar ese tiempo para volver a sembrar.

¿Qué acciones concretas está desarrollando el ministerio para apoyar a los productores afectados?

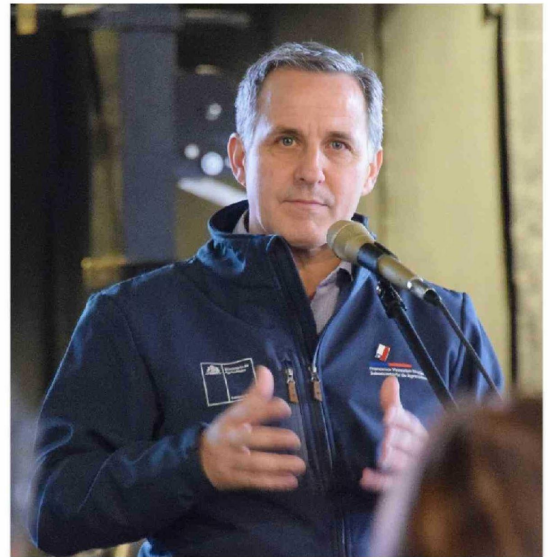
—Nos hemos reunido con todos los actores: la Federación de Remolacheros, la industria, agricultores de Ñuble y ahora también de Biobío, para ver qué herramientas disponemos como ministerio para colaborar frente a esta afectación de hectáreas productivas.

Hemos tenido reuniones con cinco agroindustrias dedicadas a distintas producciones, como granos, tomate, achicoria y otros rubros hortícolas, para ver si requieren mayor superficie y puedan absorber parte de estas hectáreas que van a quedar disponibles. Hay dos industrias que ya han mostrado interés y estamos terminando otras conversaciones para después hacer el nexo entre estas empresas y los agricultores.

Más allá de las coordinaciones, ¿el ministerio puede actuar ante una decisión tomada por una empresa privada?

—Es una decisión de privados. Nosotros no tenemos atribuciones para obligar a que una industria siga procesando un producto que le está generando pérdidas durante las últimas temporadas.

Lo que sí podemos hacer es generar articulación y utilizar herramientas del ministerio a través de programas de la Comisión Nacional de Riego



FRANCESCO VENEZIAN ABORDÓ en el impacto agrícola generado tras el anuncio de Iansa y la necesidad de mantener la rentabilidad del sector en la zona.

(CNR), del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), del programa de suelos degradados o de INDAP para los pequeños productores, de tal manera de ayudarlos en procesos de reconversión y cofinanciamiento.

También interactuamos con otros ministerios para analizar alternativas que permitan que el productor siga produciendo y manteniendo actividad agrícola en estas zonas.

Desde la Federación Nacional de Remolacheros han manifestado preocupación ante la posibilidad de que esta paralización pueda extenderse en el tiempo. ¿Qué mirada tiene el Gobierno frente a ese escenario?

—Nosotros analizamos distintas alternativas para quienes quieran mantener la remolacha. Hoy día puede existir una alternativa vinculada al bioetanol o eventualmente alguna planta más pequeña dedicada a la producción de azúcar en Chile, entendiendo que gran parte del azúcar que consumimos es importada.

Pero eso no depende directamente del Ministerio de Agricultura. Nosotros podemos reunir información, articular actores, conversar con

otros ministerios y apoyar mediante algunos instrumentos, incluso con Corfo, si existe interés de continuar con esta producción. Ese es nuestro objetivo como ministerio.

La provincia de Biobío mantiene una fuerte actividad agrícola. ¿Cuál es la importancia de trabajar con los agricultores de esta zona?

—Nosotros tenemos que dar certeza productiva. El agricultor necesita reglas claras y que los servicios del agro estén realmente al servicio de los productores. Tenemos servicios como Conaf, SAG, Indap, la Comisión Nacional de Riego, entre otros, cuyo objetivo es potenciar esta actividad y permitir que siga siendo rentable en el tiempo.

Lo importante es que las familias puedan proyectarse en la actividad agrícola y evitar un problema que hoy nos preocupa mucho, que es la desafectación del suelo agrícola. Las parcelaciones se han transformado en una competencia mucho más rentable para muchos propietarios, y la única manera de evitar que el país siga subdividiendo suelo agrícola es que al agricultor le vaya bien y no tenga que deshacerse de su propiedad.